



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

OFICIO NÚMERO: LXIII-CEY-051/2022.

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD

NÚMERO: 118/2022 Y SU ACUMULADA
121/2022

PROMOVENTE: COMISION DE DERECHOS
HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁN.

AUTORIDADES RESPONSABLES: EL H.
CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATAN Y
OTRA.

ASUNTO: SE RINDE INFORME.

SECCION DE TRÁMITE DE
CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y
DE ACCIONES DE
INCONSTITUCIONALIDAD.

H. SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

C. MINISTRO INSTRUCTOR ALBERTO PÉREZ DAYÁN.

PRESENTE.

DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ, en mi calidad de Diputada Presidenta de la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, del Periodo Ordinario de sesiones correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Constitucional, personalidad que se acredita en términos de la copia certificada de Acuerdo de fecha 31 de agosto del año 2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el mismo día, en el que se declaran electos los diputados para integrar la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año 2022; y con fundamento en el artículo 11 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, comparezco como representante de este órgano Legislativo, señalando como Delegados en términos del artículo anteriormente referido a los Licenciados en Derecho María José Andueza Medina y/o Anahí Alejandra Góngora Leal y/o Rodrigo Ignacio Ávila Cortes y/o Emir Alejandro Trujeque Góngora y/o Ariel Jesús Cetina Rivero, conjuntamente o independientemente uno del otro. Asimismo, señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones, el Recinto Oficial del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, el inmueble ubicado en periférico poniente tablaje catastral número 33083 Juan Pablo II Alborada de la ciudad de Mérida, capital del Estado de Yucatán, así como el correo electrónico direccion.juridico@congresoyucatan.gob.mx. Ante Usted, con todo respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en los artículos 10, 11, 23 y 64 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vengo por medio del presente ocurso y dentro del término legal establecido, a rendir el informe con respecto a la demanda de Acción de Inconstitucionalidad promovida por **MIGUEL ÓSCAR SABIDO SANTANA**, en su calidad de **Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán**, en contra del H. Congreso del Estado y otra autoridad.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

1. NORMA GENERAL CUYA INVALIDEZ RECLAMA LA PROMOVENTE:

- *Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante el decreto 532/2022 en el Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán en fecha 21 de julio de 2022, el cual puede ser consultado en 2022/2022-07-21_2.pdf (yucatan.gob.mx).*

2. ANTECEDENTES:

PRIMERO.- En sesión de la Diputación Permanente de fecha 13 de julio del año 2022, se turnó para su estudio, análisis y dictamen respectivo a la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, la iniciativa de Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, suscrita por los diputados José Crescencio Gutiérrez González, Erik José Rihani González, Jesús Efrén Pérez Ballote, Manuela de Jesús Cocom Bolio, Luis René Fernández Vidal y Dafne Celina López Osorio, integrantes de la LXIII legislatura del Congreso del Estado.

SEGUNDO.- Posteriormente, en sesiones de trabajo de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, de fechas **14, 15 y 18 de julio del 2022**, fue analizado el Dictamen de la iniciativa en comento, siendo aprobado por mayoría el día **18 de julio del 2022**.

TERCERO.- El día **18 de julio del 2022**, a las dieciséis horas con dieciocho minutos, se llevó a cabo la sesión de la Diputación Permanente, en la cual, convoca para la celebración del Quinto Periodo Extraordinario de Sesiones, correspondiente al primer año constitucional de la Sexagésima Tercera Legislatura, proponiendo que dicha celebración se lleve a cabo el día 21 de julio del 2022, siendo aprobada por mayoría.

CUARTO.- En virtud de que el Dictamen de la Comisión Especial para la atención de la situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, que expide la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, había sido distribuido en su oportunidad a todos y cada uno de los integrantes de la Diputación Permanente, en fecha **21 de julio del 2022**, fue sometido a votación en Sesión Extraordinaria del Pleno de este H. Congreso del Estado, el cual fue aprobado por mayoría.

QUINTO.- Finalmente, en fecha **21 de julio de 2022** fue publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, el Decreto 532/2022, por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, entrando en vigor al día siguiente, es decir, el 22 de julio del 2022.

3. INFORME:

PRIMERO.- Deviene de infundado el primer concepto de invalidez hecho valer por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, mediante el cual reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante el decreto 532/2022, supuestamente por violar el derecho



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

al desarrollo progresivo de los derechos humanos contemplado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de no cumplir con la obligación de expresar mediante una motivación reforzada al afectar el derechos humano a la Seguridad Social. Lo anterior por cuanto mi representada respetó en todo momento la garantía de irretroactividad de las leyes.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, estima que en el Decreto 532/2022 publicado en la edición vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, solo se preservaron los derechos de las personas que actualmente gozan de una pensión por sus años de servicios, por invalidez o que han llegado a la edad de 55 años, con un mínimo de 15 años de cotización al Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán; siendo que, a quienes no actualizaban dicho supuesto, a quienes la Ley denomina como en "transición" y "de nuevo ingreso", se les comenzaría aplicar las disposiciones nuevas de la Ley tildada de inconstitucional, como lo es el incremento de manera gradual respecto de las cuotas de aportaciones al Instituto, la extensión de los años de servicio prestados al Estado como requisito para acceder a una jubilación digna, y la fijación de un salario regulador que servirá como base para el cálculo de las pensiones establecidas en la Ley.

Para mejor proveer, vale la pena transcribir los argumentos de la promovente de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, mismos que leen así:

3

"... el Decreto 532/2022 publicado en versión vespertina del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán de fecha 21 de julio del año en curso, que contiene la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán que se Impugna, solo se preservaron los derechos de las personas que actualmente gozan de una pensión por sus años de servicio por invalidez que han llegado a la edad de 55 años y con un mínimo de 15 años de cotización al Instituto de Seguridad Social del Estado de Yucatán (Instituto); y por el contrario, plantean un detrimento en el derecho a la seguridad social para los trabajadores a quienes se les denominó en transición y a los de nuevo ingreso.

Para los trabajadores que la ley denomina "en transición" conforme los artículos transitorios sexto, séptimo, octavo, décimo, décimo primero, décimo segundo, décimo tercero y décimo cuarto del decreto que se impugna, se estableció un régimen regresivo, virtud de lo siguiente:

- 1. De manera gradual, año con año, su porcentaje de aportación será incrementado. Los artículos transitorios establecen de un 8% con incrementos de hasta el 15% para el año 2029 en adelante.*
- 2. La Pensión por Jubilación de las personas servidoras públicas en transición, incrementa los años de servicio, bajo un esquema de salario regulador.*
- 3. La pensión por vejes, previo que los servidores públicos en transición que, teniendo 15 años de servicio puedan acceder a este derecho bajo un esquema de acuerdo al año que les falte por cotizar la pensión o jubilación conforme a la ley que se abroga.*
- 4. La pensión por vejes se calculará multiplicando el salario regulador por una tabla de factores que establecen reductores que representan del 0.50 al 1.00 de*



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

acuerdo a los años cotizados; esto, estableciendo una base mínima de 15 años hasta los 30 años o más.

5. La pensión por retiro anticipado por edad avanzada considera descuentos o reducciones en un 5% del monto de acuerdo al salario regulador por cada año que le falte para cumplir con la edad de jubilación, a partir de que el trabajador cuente con la edad 60 años y un mínimo de 20 años cotizados.

6. El régimen transitorio relativo a las denominadas "servidores públicos en transición", determina que para el caso de la pensión por invalidez por causas ajenas al trabajo aplicables a salarios reguladores tazados por factores de acuerdo a los años trabajados, son considerados en un mínimo de 5 años y hasta más de 30 años de cotización al Instituto Para poder calcular la pensión por invalidez no imputable a causas de su trabajo.

7. El seguro de cesantía o separación establece que las personas que se separen de sus trabajos por la edad, ya sea por renuncia o por despido, y no alcancen a pensionarse, podrán retirar sus aportaciones, pero solamente por un porcentaje del 15% de las aportaciones hechas por el servidor público, sin ninguna otra prestación.

En general, la ley que se tilda de inconstitucional aumenta los años de edad y de servicio a de las personas servidoras públicas, pues de considerar, los 55 años de edad en el caso de las mujeres y de 60 años en caso de los hombres y en ambos casos, 30 años de cotización antes previstos, ahora se establecen 65 años de edad y 35 años de cotización, sin diferenciación por género. Por su parte, las jubilaciones nuevas para los servidores públicos en transición, habrán de fijarse con base a un salario regulador que disminuye el ingreso salarial; de esta manera, la regresividad manifestada, se visualiza en principio, con el aumento considerable tanto en los años de edad como en los años de servicio que tienen que acreditarse y la disminución del ingreso que se percibirá al momento de su jubilación.

Además, como se mencionó en el párrafo que antecede, las jubilaciones habrán de fijarse con base a un salario regulador que disminuye el ingreso salarial, por tanto, perjudica a quienes durante toda su vida laboral fueron pagados con base al salario diario y sus incrementos respecto al salario mínimo general vigente; en tanto en la norma que se impugna, se accede a partir de los 20 años de cotización y, como requisito, se debe contar con 65 años de edad; además en la norma vigente, se accede a partir de los 15 años de cotización y como requisitos contar con 60 años de edad.

Asimismo, hay una clara regresividad en la manera en que la ley impugnada pretende fijar la pensión de las personas servidoras públicas, pues anteriormente, se consideraba el promedio mensual de todas las percepciones computables al servidor público correspondientes a los dos años inmediatos anteriores a la fecha de la baja que emita la entidad pública en la que laboraba, mientras que ahora se considerará el 85% del promedio ponderado de los salarios de cotización que percibió la persona servidora pública durante los últimos veinte años de su vida activa como trabajador, esta cuestión, no únicamente de principio ya priva a la persona servidora pública de un 15% de su salario al momento de su jubilación, sino que en caso de que haya podido acceder a un puesto de alto rango con un salario más remunerador casi al final de su vida como trabajador activo; esto no se reflejará en gran proporción en la pensión que reciba, en virtud de que por el cambio efectuado en la normativa, en lugar de recibir lo respectivo por los dos años anteriores a su jubilación, se considerarán los últimos veinte años laborados, lo que indudablemente mermará en la cantidad final que se fije en la pensión; y por consiguiente en su proyecto de vida".



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Con la finalidad de combatir lo alegado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, mencionado en líneas precedentes y respecto a la falsa violación al principio de regresividad es necesario adentrarnos a lo que se entiende por este principio interpretativo que establece que los derechos no pueden disminuir, por lo cual, al sólo poder aumentar, progresan gradualmente, sin embargo, es importante notar que la naturaleza de este principio depende del ámbito en el que esté incorporado y de la actividad para la que se aplique.

En primer término, mi representado no vulnera este principio de progresividad pues al tratarse el objetivo de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán el de garantizar o sostener la viabilidad del instituto y a su vez de las pensiones y jubilaciones y demás derechos de los trabajadores tanto en activo como ya jubilados al Servicio del Estado de Yucatán, esto implica un beneficio en pro de la colectividad, principalmente el de todos los trabajadores al servicio del estado de Yucatán tanto en activo como los ya jubilados, pues si se ve de cierta manera este sistema instalado es una cadena que por ahora puede parecer una afectación a los derechos aducidos pero lo cierto, es que resulta una forma de garantizar a nuestras generaciones presentes y futuras para que estas obtengan o puedan acceder a estas prestaciones de seguridad social, pues si desde ahora se implementan estas medidas, no cabe duda que pronto el instituto volverá a capitalizarse y generar por sí mismo la subsistencia necesaria.

5

Asimismo, es preciso mencionar, que como se advierte en la Exposición de Motivos la propia ley, su iniciativa fue presentada bajo el esquema que el sistema pensionario en el Estado de Yucatán se encuentra en un punto crítico, dado que el incremento poblacional es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, ya que se estima que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significaría un desbalance en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), por lo que ante tal situación, era necesario modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, ya que el mismo ha quedado rebasado y actualmente resulta inviable debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, mal diseño de un sueldo regulador o la insuficiencia de aportaciones, factores que representan un cambio descomunal en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema pensionario vigente, situación que de continuar así, únicamente generaría un colapso financiero y una ruinosa descapitalización, toda vez que el importe de los egresos por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones, seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones, por lo que es necesario una adaptación a lo tiempo modernos que permitan una mayor rentabilidad presupuestal a mayor tiempo.

Ahora bien, es menester traer a colación lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que "*a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna*".

Nuestros más altos Tribunales han sostenido que esta disposición constitucional contempla la garantía de irretroactividad de la ley, que regula la validez temporal de las



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

normas, su vigencia, entendida como la condición que les permite producir consecuencias jurídicas; contiene por tanto, una de las reglas esenciales para el funcionamiento del orden jurídico.

Esa validez temporal se encuentra estrechamente vinculada con los principios de legalidad y seguridad jurídica, porque determina la operatividad del sistema legal, así como los efectos jurídicos que producen las normas, esto es, la certeza de que las normas futuras no modificarán situaciones legales surgidas bajo el amparo de una norma vigente en un momento determinado; en otras palabras, la validez temporal se relaciona con la seguridad de las ventajas, beneficios o situaciones concebidas bajo un régimen previo a aquél que modifique un determinado supuesto o trate un caso similar de modo distinto. A su vez, la capacidad de operar de la norma se fundamenta en el principio de certeza jurídica.

La retroactividad se encuentra vinculada con la operación en el tiempo de una norma; implica la eficacia de las disposiciones sobre consecuencias jurídicas derivadas de hechos acontecidos previamente a su expedición, es decir, el precepto se aplica a hechos consumados durante la vigencia de una disposición anterior o a situaciones jurídicas que se encuentran aún en proceso de verificación, en relación con los efectos producidos antes de la entrada en vigor de la nueva ley.

En ese orden de ideas, el precepto constitucional contempla la regla general de que las normas jurídicas son expedidas con el objeto de regular situaciones presentes y futuras, lo que conlleva la prohibición de aplicarse a situaciones previas al inicio de su vigencia, cuando ello depare una afectación al gobernado.

Al respecto, nuestros Altos Tribunales han tomado en consideración como parámetros para determinar si una ley es retroactiva o no, esencialmente, por una parte, la teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derechos y por otra, los componentes de una norma jurídica como son el supuesto y su consecuencia.

En el caso de la llamada teoría de los derechos adquiridos y de las expectativas de derecho, se dice que una ley es retroactiva cuando desconoce derechos adquiridos conforme a una ley anterior, no lo es si implica el desconocimiento de meras expectativas de derecho.

Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver, entre otras, las acciones de inconstitucionalidad 80/2008 y 88/2008 con sus acumuladas 90/2008 y 91/2008, sostuvo que el derecho adquirido es aquel que **implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, a su dominio o a su haber jurídico**, en tanto la expectativa de derecho la concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; en otras palabras, **el derecho adquirido constituye una realidad y la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha materializado.**

En este mismo sentido se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que lleva por rubro y texto:

Registro digital: 232511

Instancia: Pleno

Séptima Época

Materias(s): Común

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 145-150, Primera



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Parte, página 53

Tipo: Aislada

DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.

El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.

En ese orden de ideas, derivado de diversos análisis y criterios por ese H. Altísimo Tribunal de la Nación, se concluye que un derecho adquirido es aquel que **ha sido integrado al patrimonio del individuo**, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o al haber jurídico; mientras que la expectativa de derecho es una **pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho**. Es decir, **mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho comprende un futuro, ya que su otorgamiento está condicionado al cumplimiento de un supuesto jurídico inmerso en una ley.**

7

De conformidad con tal distinción, se determina que no se pueden afectar o modificar derechos adquiridos durante la vigencia de una ley anterior, ya que se regirán siempre por la ley al amparo de la cual nacieron y entraron a formar parte del patrimonio de las personas, aun cuando haya cesado su vigencia al haber sido substituida por otra norma; en contraparte, una nueva ley podrá afectar simples expectativas o esperanzas de gozar de un derecho que aún no ha nacido en el momento en que entró en vigor, sin que se considere retroactiva en perjuicio del gobernado.

Es decir, la ley no debe perturbar situaciones jurídicas consumadas o constituidas con anterioridad (de las que derivan derechos y obligaciones), ni las consecuencias que de estas últimas se sigan produciendo en los casos en que el desconocimiento o afectación de esas consecuencias impliquen necesariamente la alteración de la propia situación jurídica o del hecho adquisitivo del derecho, puesto que **únicamente podría influir en las consecuencias AÚN NO PRODUCIDAS** cuando con ello no se destruya o afecte en perjuicio del interesado la situación jurídica consumada generadora de su derecho.

Asimismo se reitera, que cuando el acto realizado introduce un bien, facultad o un provecho al patrimonio de un individuo, o a su dominio o haber jurídico, no se le puede privar mediante una disposición legal en contrario; lo que no acontece tratándose de las expectativas de derechos, que son aquellos derechos que se pueden llegar a obtener en el futuro con la realización de determinados actos complementarios por la ley, **pero que todavía no se obtienen**, por lo que si una ley o un acto concreto de aplicación no afecta derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho, no se viola la garantía de irretroactividad de la ley, prevista en el artículo 14 constitucional anteriormente citado.

En este sentido se pronunció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LXXXVIII/2001 que establece:



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Registro digital: 189448

Instancia: Segunda Sala

Novena Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 2a. LXXXVIII/2001

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001, página 306

Tipo: Aislada

IRRETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. NO SE VIOLA ESA GARANTÍA CONSTITUCIONAL CUANDO LAS LEYES O ACTOS CONCRETOS DE APLICACIÓN SÓLO AFECTAN SIMPLES EXPECTATIVAS DE DERECHO, Y NO DERECHOS ADQUIRIDOS.

Conforme a la interpretación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto al tema de la irretroactividad desfavorable que se prohíbe, se desprende que ésta se entiende referida tanto al legislador, por cuanto a la expedición de las leyes, como a la autoridad que las aplica a un caso determinado, ya que la primera puede imprimir retroactividad, al modificar o afectar derechos adquiridos con anterioridad y la segunda, al aplicarlo, produciéndose en ambos casos el efecto prohibido por el Constituyente. Ahora bien, el derecho adquirido es aquel que ha entrado al patrimonio del individuo, a su dominio o a su haber jurídico, o bien, es aquel que implica la introducción de un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona o haber jurídico; en cambio, la expectativa de derecho es una pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho; es decir, mientras que el derecho adquirido constituye una realidad, la expectativa de derecho corresponde al futuro. En estas condiciones, se concluye que si una ley o un acto concreto de aplicación no afectan derechos adquiridos sino simples expectativas de derecho no violan la garantía de irretroactividad de las leyes prevista en el precepto constitucional citado.

Por otra parte, conforme a la "teoría de los componentes de la norma", el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al conocer del amparo en revisión 2013/94, en sesión del día dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, por mayoría de diecinueve votos, determinó que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si el supuesto se realiza debe generarse la consecuencia jurídica, lógicamente, para determinar cuándo una norma jurídica cumple con la garantía de no retroactividad, se debe atender al momento de realización de sus componentes.

En este sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró:

"Ahora bien, atendiendo al momento en que se realiza el supuesto y consecuencia jurídicos, cabe señalar que generalmente, y en principio, pueden presentarse las hipótesis siguientes:

"1. Cuando durante la vigencia de una ley se actualizan de modo inmediato el supuesto y la consecuencia jurídicos establecidos por ella; si con posterioridad a ello entra en vigor una nueva disposición legal, ésta no podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto y consecuencia, pues de lo



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

contrario violaría la garantía individual de mérito, atento a que antes de la vigencia de la nueva norma ya se habían realizado los componentes de la ley sustituida.

"2. El caso en el que la norma legal establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas; si dentro de la vigencia de esa norma se actualiza el supuesto y no todas las consecuencias, sino sólo alguna de ellas, una nueva ley no podrá variar las ya ejecutadas, pues de lo contrario violaría la garantía de irretroactividad de la ley, como acontece en la hipótesis expuesta en primer término.

"3. Puede acontecer que la norma legal contemple un supuesto integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia; en este evento, si bajo el tiempo de vigencia de la citada norma se actualiza alguno de esos actos parciales o supuestos, la nueva legislación que se expida no podrá variar los ya producidos, so pena de transgredir la garantía de irretroactividad legal. De aquí se deriva, entonces, que si alguno o algunos de los actos parciales o supuestos previstos por la disposición anterior, que no se ejecutaron durante su vigencia, son modificados por la nueva disposición, esto tampoco va a entrañar violación a la garantía constitucional mencionada, ya que tal acto o supuesto va a generarse bajo el imperio de la nueva ley y, consecuentemente, son a las determinaciones de ésta a las que habrá de supeditarse su realización, así como la consecuencia jurídica que deba producirse."

9

Lo anterior, también se puede leer del siguiente criterio jurisprudencial:

Registro digital: 166508

Instancia: Pleno

Novena Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: P/JJ. 123/2001

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
Tomo XIV, Octubre de 2001, página 16

Tipo: Jurisprudencia

RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a la citada teoría, para determinar si una ley cumple con la garantía de irretroactividad prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, ésta debe producirse, generándose, así, los derechos y obligaciones correspondientes y, con ello, los destinatarios de la norma están en posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con éstas; sin embargo, el supuesto y la consecuencia no siempre se generan de modo inmediato, pues puede suceder que su realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto acontece, por lo general, cuando el supuesto y la consecuencia son actos complejos, compuestos por diversos actos parciales. De esta forma, para resolver sobre la retroactividad o irretroactividad de una disposición jurídica, es fundamental determinar las hipótesis que pueden presentarse en relación con el tiempo en que se realicen los componentes de la norma jurídica. Al respecto cabe señalar que, generalmente y en principio, pueden darse las



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

siguientes hipótesis: 1. Cuando durante la vigencia de una norma jurídica se actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la consecuencia establecidos en ella. En este caso, ninguna disposición legal posterior podrá variar, suprimir o modificar aquel supuesto o esa consecuencia sin violar la garantía de irretroactividad, atento que fue antes de la vigencia de la nueva norma cuando se realizaron los componentes de la norma sustituida. 2. El caso en que la norma jurídica establece un supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si dentro de la vigencia de esta norma se actualiza el supuesto y alguna o algunas de las consecuencias, pero no todas, ninguna norma posterior podrá variar los actos ya ejecutados sin ser retroactiva. 3. También puede suceder que la realización de alguna o algunas de las consecuencias de la ley anterior, que no se produjeron durante su vigencia, no dependa de la realización de los supuestos previstos en esa ley, ocurridos después de que la nueva disposición entró en vigor, sino que tal realización estaba solamente diferida en el tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo o término específico, o simplemente porque la realización de esas consecuencias era sucesiva o continuada; en este caso la nueva disposición tampoco deberá suprimir, modificar o condicionar las consecuencias no realizadas, por la razón sencilla de que éstas no están supeditadas a las modalidades señaladas en la nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla un supuesto complejo, integrado por diversos actos parciales sucesivos y una consecuencia. En este caso, la norma posterior no podrá modificar los actos del supuesto que se haya realizado bajo la vigencia de la norma anterior que los previó, sin violar la garantía de irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los actos componentes del supuesto que no se ejecutaron durante la vigencia de la norma que los previó, si son modificados por una norma posterior, ésta no puede considerarse retroactiva. En esta circunstancia, los actos o supuestos habrán de generarse bajo el imperio de la norma posterior y, consecuentemente, son las disposiciones de ésta las que deben regir su relación, así como la de las consecuencias que a tales supuestos se vinculan.

10

Hasta aquí, una vez analizados todos los conceptos referentes, es importante destacar que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán contenida en el Decreto cuya inconstitucionalidad se reclama por esta vía –Ley del ISSTEY–, tiene un ámbito de aplicación el cual comprende tres grupos de personas, siendo estos los siguientes:

- **Nuevas generaciones**, es decir aquellas personas que ingresaron ante el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, a partir del día 22 de julio del año 2022;
- **Personas pensionadas o con derecho adquirido a pensión**, las cuales tal y como señala el artículo Cuarto Transitorio de la Ley de Seguridad Social, comprende aquellos que ya tienen el carácter de jubilados o pensionados, o quienes a la entrada en vigor de la nueva ley, ya habían cumplido con los requisitos para el acceso a la jubilación voluntaria o jubilación necesaria reguladas en las fracciones I y II del artículo 63 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, ya abrogada.
- **Personas en Transición**, corresponde a aquellas personas que se hubieren afiliado al Instituto con fecha anterior a la entrada en vigor de la nueva ley, pero que no hayan cumplido con los requisitos para acceder a una jubilación voluntaria o



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

necesaria, a las cuales se les aplicará las excepciones descritas en los demás transitorios, esto de conformidad a lo establecido en el artículo Sexto Transitorio.

Conforme a lo anterior, el nuevo sistema de seguridad social implementado con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán contenida en el Decreto que se reclama por supuesta inconstitucionalidad, no afecta ni desconoce los supuestos acontecidos con anterioridad a la vigente ley, como son los años de servicio o las cotizaciones realizadas, siendo que para el caso de las personas servidoras públicas que hayan adquirido derechos, conforme al artículo Transitorio Cuarto de la vigente Ley del ISSTEY no serán afectados por el nuevo cuerpo normativo.

De tal forma, que si bien durante la vigencia de la ley abrogada se actualizaron alguno o algunos de los actos o supuestos parciales previstos por las normas en cuestión, lo cierto es que dichos derechos se ven totalmente respetados.

En ese orden de ideas, **las personas en transición, no cuentan con un derecho adquirido**, toda vez, que a la entrada en vigor de la nueva ley, no habían cumplido con los requisitos señalados en la ley ya abrogada, por consiguiente estas personas **únicamente tienen una expectativa de derecho**, ya que la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento en que empiezan a laborar y a cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento se encuentra condicionado al cumplimiento de requisitos legales, por lo que mientras éstos no se cumplan, la pensión constituye una expectativa de derecho.

11

Por lo anterior cabe concluir que, si los preceptos reclamados modificaron algunos de los supuestos parciales integrantes del supuesto jurídico previsto por la ley anterior pero no realizado bajo la vigencia de dicha ley, sino de la nueva ley, consecuentemente, tales preceptos no violan la garantía constitucional en examen, dado que será esta nueva ley la que regirá dicho supuesto parcial y, con ello, la consecuencia jurídica que se genera, que en este caso la constituye la jubilación o la pensión correspondiente.

Al caso resulta aplicable a siguiente tesis jurisprudencial:

Registro digital: 195676

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 42/98

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VIII, Agosto de 1998, página 10

Tipo: Jurisprudencia

JUBILACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. LOS PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DEL DECRETO 241 QUE REFORMÓ LA LEY DEL ISSSTELEÓN, EN CUANTO A LAS BASES QUE RIGEN A AQUÉLLA, NO VIOLAN LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD.

El párrafo primero del artículo sexto transitorio del Decreto 241 del Congreso del Estado de Nuevo León, de veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y tres, que reformó la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, dispone que: "Los servidores públicos que se encontraban sujetos al régimen de cotización



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

previsto en el ordenamiento abrogado, podrán jubilarse a los treinta años de servicio y veintiocho en el caso de la mujer, alcanzando una pensión proporcional a su último salario de cotización neto, conforme a la siguiente tabla.”; en tanto que, el párrafo segundo precisa la indicada “tabla”. Ahora bien, la circunstancia de que esta reforma legal dé lugar a que quienes se jubilen a partir de su vigencia obtengan menos beneficios que quienes lo hicieron con anterioridad, en virtud de la aplicación del salario neto, en vez del nominal que antes se consideraba, y por la modificación de los porcentajes para el cálculo de la pensión, no implica que se viole la garantía de irretroactividad de las leyes, prevista en el primer párrafo del artículo 14 constitucional, tanto a la luz de la teoría de los derechos adquiridos como a la de la teoría de los componentes de la norma. En relación con la primera teoría, debe considerarse que la pensión por jubilación no constituye un derecho que los trabajadores en activo adquieran por existir la relación laboral equiparada y por haber cotizado en el sistema relativo, ya que la introducción de dicha prestación al patrimonio jurídico de aquéllos se encuentra condicionada al cumplimiento de los años de servicio requeridos para ello, por lo que mientras ese requisito no se cumpla, tal prestación constituye una mera expectativa de derecho, de lo que se sigue que la disposición transitoria en comento no afecta derechos adquiridos, respetándose la garantía señalada. Por otra parte, con base en la teoría de los componentes de la norma y dado que el derecho a la jubilación es la consecuencia jurídica de una serie de supuestos o actos parciales, el hecho de que los trabajadores al servicio del Estado de Nuevo León que obtengan tal prestación con posterioridad a la entrada en vigor de la reforma en comento reciban un trato menos benéfico de los que la hubieren obtenido con anterioridad, no provoca una violación a la citada garantía, pues el nuevo salario base para calcular el monto de la pensión por jubilación, y el porcentaje al que ella equivaldrá constituyen supuestos parciales de tal prerrogativa laboral, que una vez actualizados generan el derecho a la jubilación; además, la constitucionalidad de la modificación legal de mérito deriva de que mediante ella no se afectan los supuestos parciales, previamente acontecidos, de dicha consecuencia, pues no desconoce los años de servicio, las cotizaciones y el periodo durante el cual se realizaron.

Asimismo, podrán aplicarse a contrario sensu los criterios que a continuación se transcriben, en los cuales se determina que, los derechos de una jubilación, entran al patrimonio del trabajador CUANDO ÉSTE ADQUIERE EL CARÁCTER DE JUBILADO, y solo en dicho caso, podría considerarse, que una ley que modifica esos derechos sociales, que ya forman parte de la esfera de jubilado, es retroactiva y violatoria a derechos adquiridos.

Registro digital: 2005318

Instancia: Plenos de Circuito

Décima Época

Materias(s): Laboral, Administrativa

Tesis: PC.I.A. J/5 A (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 2, Enero de 2014, Tomo III, página 2320

Tipo: Jurisprudencia

PENSIÓN JUBILATORIA OTORGADA POR EL ISSSTE. SUS



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

INCREMENTOS CONSTITUYEN DERECHOS ADQUIRIDOS DERIVADOS DE AQUÉLLA, POR LO QUE SU CÁLCULO DEBE HACERSE EN LA MISMA PROPORCIÓN EN QUE AUMENTEN LOS SUELDOS BÁSICOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 57, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY QUE RIGE ESE INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 4 DE ENERO DE 1993).

Conforme a la jurisprudencia P./J. 123/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE LOS COMPONENTES DE LA NORMA.", al resolver sobre la aplicación retroactiva de una ley, debe analizarse la verificación del supuesto y de la consecuencia previstos en la norma jurídica correspondiente, para así determinar si se está en presencia de un derecho adquirido o de una expectativa de derecho y decidir si se está o no ante una aplicación retroactiva de la ley. Por su parte, los artículos 48 y 60 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el 4 de enero de 1993, disponen que la pensión por jubilación constituye una prestación de seguridad social otorgada por el instituto a favor de los trabajadores que cumplieron, entre otros requisitos, con determinado tiempo de prestación de servicios. Además, junto con el pago de la pensión, los jubilados adquieren otros derechos, como lo es la forma de cálculo de los incrementos de su pensión, en términos del artículo 57, párrafo tercero, de dicha ley, la cual tiene carácter accesorio a su pensión, ya que entra al patrimonio del trabajador justo al momento en que se adquiere el carácter de jubilado y se mantiene mientras se tenga derecho a gozar de la pensión, de manera que constituye un derecho indisoluble del haber pensionario, cuya ejecución no esté sometida a condición o plazo posterior que sea susceptible de modificar dicha forma de cálculo en lo futuro, por lo que debe concluirse que el supuesto y la consecuencia jurídica relativos se dan de manera inmediata, ubicándose dentro de la hipótesis 1 de la jurisprudencia aludida; por tanto, si los incrementos a la pensión jubilatoria constituyen derechos adquiridos derivados de su otorgamiento, los trabajadores que obtuvieron esa pensión con base en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el 4 de enero de 1993, tienen derecho a que su cálculo se haga en la misma proporción en que aumenten los sueldos básicos de los trabajadores en activo.

Registro digital: 177547

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: I.8o.A.76 A

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tome XXII, Agosto de 2005, página 1961

Tipo: Aislada

PENSIÓN JUBILATORIA. EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, VIGENTE A PARTIR DEL CINCO DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES, NO ES APLICABLE A LAS OTORGADAS CON ANTERIORIDAD A ESA FECHA POR CONSTITUIR DICHA PRESTACIÓN UN DERECHO ADQUIRIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE HASTA EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

DE DOS MIL UNOJ.

El texto del párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor hasta el cuatro de enero de mil novecientos noventa y tres, establecía que las cuantías de las pensiones se aumentarían al mismo tiempo y en la misma proporción en que aumentarían los sueldos básicos de los trabajadores en activo. Por su parte, el texto que estuvo vigente a partir del cinco de enero de dicho mes y año, y hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil uno, disponía que la cuantía de las pensiones se incrementará conforme aumente el salario mínimo general para el Distrito Federal, de tal modo que todo incremento porcentual a dicho salario se refleje simultáneamente en las pensiones que paga el instituto. Del contenido de ambos textos se desprenden dos formas diversas para incrementar la cuantía de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, las cuales, atendiendo a la época en que el evento de jubilación aconteció, deben servir de base para calcular en qué proporción se aumentará la misma. Lo anterior, en virtud de que conforme a la teoría de los derechos adquiridos, la pensión jubilatoria de un trabajador que prestó sus servicios al Estado, y que se jubiló con anterioridad a la entrada en vigor de la norma en comento, constituye un derecho adquirido, pues desde ese momento surgió su derecho a recibirla; por tanto, aquélla se debe aumentar al mismo tiempo y en igual proporción en que incrementen los sueldos básicos de los trabajadores en activo, y no conforme aumente el salario mínimo general en el Distrito Federal, ya que tal supuesto sólo se actualiza en el caso de aquellos trabajadores que hayan obtenido tal derecho con posterioridad a la reforma de dicho numeral. Además, conforme a la teoría de los componentes de la norma se desprende que, no es posible que se ordene la aplicación en forma retroactiva del citado precepto vigente a partir del cinco de enero de mil novecientos noventa y tres, toda vez que el trabajador retirado obtuvo ese derecho con anterioridad a la aludida fecha; habida cuenta que con la reforma de mérito se estableció un trato menos benéfico para efectos del incremento de la pensión respectiva, lo que resulta violatorio de la garantía de irretroactividad de la ley prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por ende, no resulta procedente la aplicación de una norma posterior que limite o modifique los derechos adquiridos del trabajador.

Por otra parte, el nuevo sistema de seguridad social implementado con la entrada en vigor de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, no puede estimarse retroactivo por el simple hecho de otorgar un trato supuestamente menos benéfico pues este sistema no afecta ni desconoce los supuestos acontecidos con anterioridad a la vigente ley, como son los años de servicio o las cotizaciones realizadas, habida cuenta que la pensión es una expectativa de derecho condicionada a la satisfacción de determinados requisitos

Así, toda vez que una expectativa de derecho resulta ser un derecho no materializado en una esfera jurídica real. En ese entendido, no puede advertirse que a través de la norma reclamada se vulneren derechos adquiridos y consecuentemente exista una regresión como aduco la Comisión promovente, al señalar violentados los derechos de progresividad a la seguridad social, y previsión social, de las trabajadores considerados como en "transición y de nuevo ingreso", pues al contar estos únicamente con una expectativa de derecho no se les



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

vulnera ninguna garantía de las señaladas, pues ni siquiera se encuentran en el supuesto, porque aún no se materializa o cumple con el supuesto de estos beneficios.

Por lo anterior, y relacionado a lo que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, alega en diversos de sus conceptos de invalidez contenidos en su escrito, al supuestamente transgredirse con la nueva Ley de Seguridad Social del Estado diversas garantías, entre las cuales se encuentran la progresividad e irretroactividad de las leyes, porque modifican y suprimen derechos y prestaciones laborales adquiridos bajo la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el 10 de septiembre de 1976, se llega a la conclusión que **no se puede considerar que una persona tiene un derecho adquirido por el simple hecho de ingresar y cotizar en un sistema de seguridad social**, ya que para ello se requiere cumplir formalmente con los requisitos que establece el ordenamiento legal para acceder a las prestaciones respectivas, y así obtener un derecho adquirido, como lo es el caso de las personas que se encuentran reguladas en el artículo Sexto Transitorio de la nueva ley, a las cuales **NO** se les pueden considerar personas con derechos adquiridos, si no que únicamente tienen una expectativa de derechos, por ello no existe una violación al principio de irretroactividad de la ley

En este contexto, las personas en transición al no haber cumplido con los requisitos establecidos en la ley anterior para acceder a una jubilación voluntaria o necesaria, son personas que solamente tienen una expectativa de derecho, por lo que los conceptos reclamados en la presente acción de inconstitucionalidad, resultan no ser susceptibles a que se ocasione perjuicio alguno a su esfera jurídica y mucho menos, se estima que existe una violación al principio de irretroactividad de la ley.

15

En adición, hay que aclarar que el derecho humano a la seguridad social no exige que la expectativa a obtener una pensión se adquiera y conserve de manera indefinida, por lo que consecuentemente, dicha ley no transgrede el referido derecho humano, ya que se emitió dentro del margen de configuración del que goza el legislador con la finalidad de garantizar la suficiencia de recursos para el pleno goce de otros derechos para todos los beneficiarios

Sirven de apoyo para sustentar las ideas anteriores los criterios siguientes:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 166382

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 125/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 35

Tipo: Jurisprudencia

ISSSTE. LAS MODIFICACIONES AL ANTERIOR SISTEMA DE PENSIONES NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY (ARTÍCULO DÉCIMO TRANSITORIO DE LA LEY VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). Conforme a las teorías de los derechos adquiridos y de los componentes de la norma, la pensión no es un derecho que adquieran los trabajadores al momento de comenar a laborar y cotizar al Instituto, dado que su otorgamiento está condicionado al



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

cumplimiento de ciertos requisitos, incluso, el artículo 48 de la ley derogada expresamente establecía que el derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentren en los supuestos consignados en la ley y satisfagan los requisitos que la misma señala. En esa virtud, si el artículo décimo transitorio, para el otorgamiento de una pensión por jubilación a partir del 1o. de enero de 2010, además de 30 años de cotización para los hombres y 28 años para las mujeres, establece como requisito 51 años de edad para los hombres y 49 para las mujeres, la que se incrementará de manera gradual hasta llegar a los 60 y 58 años respectivamente, en el año 2026, aumento que también se refleja para la pensión de retiro por edad y tiempo de servicios de 56 a 60 años y para la de cesantía en edad avanzada de 61 a 65 años, igualmente de manera gradual, lo que implica que en relación con el sistema pensionario anterior los trabajadores deben laborar más años; ello no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley que establece el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad a la entrada en vigor de la ley actual, puesto que no se desconocen los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas durante ese periodo.

Registro digital: 166395

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional, Laboral

Tesis: P./J. 155/2008

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Septiembre de 2009, página 17

Tipo: Jurisprudencia

ISSSTE. EL SISTEMA ESTABLECIDO EN LA LEY RELATIVA PARA EL INCREMENTO DE LAS PENSIONES, NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY QUE CONSAGRA EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007).

El hecho de que el citado ordenamiento legal disponga que las pensiones se incrementarán conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no conlleva una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, ya que del análisis del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, se advierte que el aumento a los salarios de los trabajadores sólo se tomaba como referente para el incremento de las pensiones cuando el incremento que en el año anterior hubiese tenido el aludido índice inflacionario fuese menor al aumento del sueldo básico de los trabajadores en activo. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que la pensión es una expectativa de derecho, en tanto está condicionada a la satisfacción de determinados requisitos, de lo que se sigue que aun cuando el nuevo sistema implementado para la actualización de las pensiones pueda generar que los trabajadores que se pensionen con posterioridad a la fecha en que entró en vigor la ley reclamada, reciban un trato menos benéfico al que hubieran obtenido conforme a la ley derogada, no provoca una violación a la garantía de irretroactividad de la ley, habida



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

cuenta que dicho sistema no afecta los supuestos parciales acontecidos con anterioridad, puesto que no se desconocen ni los años de servicios prestados al Estado ni las cotizaciones realizadas.

Registro digital: 167465

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Novena Época

Materias(s): Administrativa

Tesis: II.T.Aux.3 A

Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Torno XXIX, Abril de 2009, página 1917*

Tipo: Aislada

JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS. EL OTORGAMIENTO DE LA PENSIÓN RELATIVA CON BASE EN UNA LEGISLACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL POSTERIOR A LA QUE REGÍA CUANDO INGRESARON A LABORAR, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

Los trabajadores al servicio del Estado no adquieren el beneficio a una pensión por jubilación conforme a las disposiciones vigentes en la época en que se incorporaron a la función pública, ya que su concesión constituye una expectativa de derecho, en tanto que está condicionada a la satisfacción de ciertos requisitos, como la edad y la antigüedad en el servicio. En esa tesitura, el otorgamiento de una pensión por jubilación a los servidores públicos del Estado de México y sus Municipios con base en una legislación de seguridad social posterior a la que regía cuando ingresaron a laborar, no viola el principio de irretroactividad de la ley, como en el caso de que se aplique la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado y Municipios, publicada en la Gaceta del Gobierno local el 19 de octubre de 1994 (actualmente abrogada), para efectos de cuantificar la señalada pensión a quienes comenzaron a trabajar con la vigencia de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México, de sus Municipios y de los Organismos Coordinados y Descentralizados, expedida mediante decreto legislativo de 15 de agosto de 1969.

TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN NAUCALPAN DE JUÁREZ, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo directo 792/2008. Jacobo Ortega Montenegro. 29 de enero de 2009.

Unanimidad de votos. Ponente: Eugenio Reyes Contreras. Secretaria: Olga Lidia Treviño Berrones.

Ahora bien, en atención a lo igualmente aludido por la parte Comisión promovente, en relación a que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, debió haberse elaborado con una razonabilidad objetiva mediante motivación reforzada para la elaboración de su dictamen, resulta infundado toda vez que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, parece ignorar que la motivación reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate, cuestión que no se presenta en el caso que nos ocupa.

Con relación a ello, se emitió la siguiente Jurisprudencia:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 165745

Instancia: Pleno

Novena Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: P./J. 120/2009

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXX, Diciembre de 2009, página 1255

Tipo: Jurisprudencia

MOTIVACIÓN LEGISLATIVA. CLASES, CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS.

Los tribunales constitucionales están llamados a revisar la motivación de ciertos actos y normas provenientes de los Poderes Legislativos. Dicha motivación puede ser de dos tipos: reforzada y ordinaria. La reforzada es una exigencia que se actualiza cuando se emiten ciertos actos o normas en los que puede llegarse a afectar algún derecho fundamental u otro bien relevante desde el punto de vista constitucional, y precisamente por el tipo de valor que queda en juego, es indispensable que el ente que emita el acto o la norma razone su necesidad en la consecución de los fines constitucionalmente legítimos, ponderando específicamente las circunstancias concretas del caso. Tratándose de las reformas legislativas, esta exigencia es desplegada cuando se detecta alguna "categoría sospechosa", es decir, algún acto legislativo en el que se ven involucrados determinados valores constitucionales que eventualmente pueden ponerse en peligro con la implementación de la reforma o adición de que se trate. En estos supuestos se estima que el legislador debió haber llevado un balance cuidadoso entre los elementos que considera como requisitos necesarios para la emisión de una determinada norma o la realización de un acto, y los fines que pretende alcanzar. Además, este tipo de motivación implica el cumplimiento de los siguientes requisitos: a) La existencia de los antecedentes fácticos o circunstancias de hecho que permitan colegir que procedía crear y aplicar las normas correspondientes y, consecuentemente, que está justificado que la autoridad haya actuado en el sentido en el que lo hizo; y, b) La justificación sustantiva, expresa, objetiva y razonable, de los motivos por los que el legislador determinó la emisión del acto legislativo de que se trate. Por otra parte, la motivación ordinaria tiene lugar cuando no se presenta alguna "categoría sospechosa", esto es, cuando el acto o la norma de que se trate no tiene que pasar por una ponderación específica de las circunstancias concretas del caso porque no subyace algún tipo de riesgo de merma de algún derecho fundamental o bien constitucionalmente análogo. Este tipo de actos, por regla general, ameritan un análisis poco estricto por parte de la Suprema Corte, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador. En



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

efecto, en determinados campos –como el económico, el de la organización administrativa del Estado y, en general, en donde no existe la posibilidad de disminuir o excluir algún derecho fundamental- un control muy estricto llevaría al juzgador constitucional a sustituir la función de los legisladores a quienes corresponde analizar si ese tipo de políticas son las mejores o resultan necesarias. La fuerza normativa de los principios democráticos y de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado –y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan los Congresos Locales, en el marco de sus atribuciones. Así, si dichas autoridades tienen mayor discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que en esos temas las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Por el contrario, en los asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Poder Legislativo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. En esas situaciones, el escrutinio judicial debe entonces ser más estricto, por cuanto el orden constitucional así lo exige. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma.

En esa tesitura, conviene precisar que nuestro máximo Tribunal ha señalado que las “categorías sospechosas” pueden asumirse cuando una ley contiene una distinción basada en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional, es decir, que la distinción se realiza basada en el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, cuestión que como se dijo anteriormente, no acontece en el presente caso.

19

Sirve de apoyo a lo manifestado, por analogía de razón, el siguiente criterio jurisprudencial:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2010315

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 66/2015 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II, página 1462

Tipo: Jurisprudencia

IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ERICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que cuando una ley contiene una distinción basada en una categoría sospechosa, es decir, en alguno de los criterios enunciados en el último párrafo del artículo 1o. constitucional (el origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas), el juzgador debe realizar un escrutinio estricto de la medida para examinar su constitucionalidad a la luz del principio de igualdad, puesto que estas distinciones están afectadas de una presunción de inconstitucionalidad. Si bien la Constitución no prohíbe que el legislador utilice categorías sospechosas, el principio de igualdad garantiza que sólo se empleen cuando exista una justificación muy robusta para ello.

Como es de notarse, las directrices con las que cuenta el órgano legislativo se encuentran tasadas a la luz del tipo de motivación que la propia Constitución y los órganos judiciales han establecido para gradar la intervención de poderes públicos dentro de sus decisiones. En este orden de ideas, es evidente que en el presente caso, contrario a lo que aduce la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, no nos encontramos en el supuesto en que se trate de una categoría sospechosa, por tanto no se exige que la motivación del legislador sea reforzada, pues como se mencionó anteriormente, no está obligado a precisar las razones o circunstancias especiales que consideró para aprobar el dictamen que dio como resultado el Decreto reclamado.

Por tales motivos, se insiste, el argumento manifestado resulta infundado, debido a que tratándose de actos legislativos, que tienen el carácter de generales, abstractos e impersonales, la garantía de fundamentación se cumple cuando el órgano que los realiza está constitucionalmente facultado para ello, esto es, actúa dentro de su respectivo ámbito de atribuciones, y la garantía de motivación se respeta cuando las disposiciones legales que se emiten se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente tuteladas, sin que cada una de las hipótesis normativas que las integran tengan que ser materia de una motivación específica.

Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia:

Registro digital: 232351

Instancia: Pleno

Séptima Época

Materias(s): Constitucional, Común

Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 181-186, Primera Parte, página 239

Tipo: Jurisprudencia

FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA.

Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

En este orden de ideas y acorde con el criterio que antecede, el cumplimiento de la garantía de fundamentación del acto legislativo coincide con el respeto a la garantía de seguridad jurídica relativa a la competencia constitucional consistente en que tal acto sea emitido por autoridad competente, ya que ambas garantías se cumplen cuando el órgano legislativo está facultado para emitir la ley reclamada.

Máxime que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán fue expedida por el Congreso de la entidad para regular lo relativo al sistema de seguridad social de sus trabajadores, cumpliendo con las garantías de fundamentación y de seguridad jurídica comentadas, al haber sido emitidos por el órgano facultado para ello, de conformidad con los artículos 116 y 123, apartado B, tracción XI de la Constitución General de la República y 30, fracción V de la Constitución Política del Estado de Yucatán, por lo que resulta infundado el agravio que se esgrime.

SEGUNDO.- El concepto de invalidez segundo hecho valer por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán mediante el cual manifiesta la afectación al derecho a la seguridad social causa violaciones a los derechos un mínimo vital y la protección a la familia en el caso de fallecimiento del trabajador, debido a la interdependencia de los derechos humanos, deviene totalmente de infundado, por cuanto no se transgredieron los principios constitucionales en comento al no representar una afectación a derechos previamente adquiridos, respetándose el principio de “solidaridad” en materia de seguridad social

21

Antes de entrar al análisis de lo infundado de los argumentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, resulta de importancia transcribir expresamente la parte conducente de dichos argumentos bajo los cuales reclama la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante el decreto 532/2022, al considerar que se cometen transgresiones a derechos como un mínimo vital de vida y la desprotección a la familia, específicamente en el supuesto de fallecimiento por parte del trabajador titular del derecho, mismos que son del tenor literal siguiente:

“... la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán vigente, resulta violatoria de estos derechos, aunado a que en vista de que en el artículo 125 de la citada normativa, se prevé, el derecho a las pensiones por fallecimiento, el cual establece que las personas beneficiarias por la muerte de una persona fallecida, tendrán derecho a una pensión cuyo monto será igual a un porcentaje de la pensión que recibía el titular, actualizada conforme la tabla siguiente:

AÑOS DISFRUTANDO DE PENSIÓN DE LOS BENEFICIARIOS.	PORCENTAJE DE LA PENSIÓN QUE RECIBIRÍA EL TITULAR (ACTUALIZADA).
1	100%
2	90%
3	80%
4	70%
5	60%
6 en adelante	50%



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Lo anterior, evidencia la regresión que se tiene en el reconocimiento del derecho de pensión por fallecimiento, puesto que la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha diez de septiembre del año mil novecientos noventa y seis, abrogada, no preveía en ninguno de sus artículos la disminución de la pensión otorgada a la persona beneficiaria por fallecimiento de alguna persona trabajadora, servidora pública, situación que si se prevé en la norma impugnada, tal como puede apreciarse en la tabla que precede, ya que en un periodo de 6 años se pierde hasta el 50% del monto estipulado para la pensión otorgada. Cabe mencionar, que va acorde al monto que recibía la persona titular, lo anterior se traduce que en caso de que la persona fallecida tuviera el 80% de pensión conforme a su salario, la persona beneficiaria de esta pensión a lo largo de los 6 años, únicamente estaría recibiendo el 40% del monto total de la pensión, pues lo anterior equivaldría al 50% de reducción sobre el monto otorgado.

Si pensamos que la persona fallecida tuviere hijas e hijos menores de edad o un cónyuge o dependiente económico mayor de edad, o con alguna discapacidad estaríamos pensando en una afectación a una persona en situación de vulnerabilidad, que atenta a que su familia cuente con las condiciones de un mínimo vital.

Por otre parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha mencionado con base en los criterios y elementos constitutivos del derecho a la seguridad social, que las obligaciones del Estado en relación con el derecho a la pensión son las siguientes:

22

- El derecho a acceder a una pensión luego de adquirida la edad legal para ello y los requisitos establecidos en la normativa nacional, para lo cual deberá existir un sistema de seguridad social que funcione y garantice las prestaciones, el cual deberá ser administrado, supervisado y fiscalizado por el Estado.
- El garantizar que las prestaciones sean suficientes en importe y duración, que permitan al jubilado gozar de condiciones de vida adecuadas y de acceso suficiente a la atención de salud, sin discriminación.
- Debe haber accesibilidad para obtener una pensión, es decir que se deberán brindar condiciones razonables, proporcionadas y transparentes para acceder a ella. Asimismo, los costos de las cotizaciones deben ser asequibles y los beneficiarios deben recibir información sobre el derecho de manera clara y transparente.
- Las prestaciones per pensión de jubilación deben ser garantizadas de manera oportuna y sin demoras, tomando en consideración la importancia de este criterio en personas mayores.
- Se debe disponer de mecanismos efectivos de reclamo frente a una violación del derecho a la seguridad social, con el fin de garantizar el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, lo cual abarca también, la concretización material del derecho a través de la ejecución efectiva de decisiones favorables dictadas a nivel interno.

Además, la Corte Interamericana ha considerado que la reducción de los recursos económicos en relación con la pensión genera un menoscabo en la dignidad, principalmente en las personas mayores, pues en esta etapa de su vida la pensión constituye la principal fuente de recursos económicos para solventar sus necesidades primarias y elementales del ser humano, además de que genera en las personas angustia, inseguridad e incertidumbre en cuanto a su futuro por la falta de recursos



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

económicos para su subsistencia, y conlleva intrínsecamente a la afectación en el avance y desarrollo de su calidad de vida y de su integridad personal".

En primer término, estimamos conveniente puntualizar que la Primera Sala del más Alto Tribunal del País, al resolver el amparo en revisión 1780/2006, consideró como derecho constitucional gozar del mínimo vital, el cual se erige como una institución jurídica inmersa en el respeto y tutela de los derechos humanos que incluye la protección de las condiciones materiales que permiten al gobernado llevar una existencia digna y decorosa, esto es, para sufragar sus necesidades primordiales.

A su vez, sostuvo que el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordenadas centrales del orden constitucional carecen de sentido, de tal modo que la intersección entre la potestad estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales, consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente.

Concomitantemente, aseveró que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea, inconstitucionalmente, reducida en su valor intrínseco como ser humano, por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

También precisó que el derecho en comento exige del Estado el aseguramiento de una existencia digna para las personas, como premisa básica de un Estado social, en la medida en la que se postula la idea de remover los obstáculos de orden económico y social que impidan el pleno desarrollo de la persona, así como la efectiva participación de los gobernados en la organización política, económica, cultural y social del país; y que para integrarlo no debe contemplarse únicamente el mínimo para la supervivencia económica, sino también para la existencia libre y digna, en la que queda abarcada la protección a la sana alimentación, vivienda, servicios de salud y de educación, descritos en el Texto Constitucional, que trazan un marco dentro del cual, el derecho al mínimo vital proviene del reconocimiento a la dignidad de la persona que debe alcanzar a las acciones tendentes a garantizar la supervivencia biológica de los individuos e, inclusive, puede llegar hasta la cobertura satisfactoria de las necesidades básicas, en aras de asegurar el goce efectivo de los derechos fundamentales.

Finalmente, añadió que el derecho al mínimo vital, como lineamiento tendente a que los recursos que apenas resulten suficientes para subsistir de una manera digna queden resguardados, deberá analizarse, en cada caso, tomando en cuenta las características del ingreso que se obtenga.

La ejecutoria de referencia dio lugar a la tesis 1a. XCVII/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, correspondiente al mes de mayo de 2007, página 793, cuyo texto es el siguiente:

"DERECHO AL MÍNIMO VITAL EN EL ORDEN CONSTITUCIONAL MEXICANO.-El derecho constitucional al mínimo vital cobra plena vigencia a partir de la interpretación sistemática de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución General y particularmente de los artículos 1o., 3o., 4o., 6o., 13, 25, 27, 31, fracción IV, y 123. Un presupuesto del Estado democrático de derecho es el que requiere que los individuos tengan como punto de partida condiciones tales que les permitan desarrollar un plan



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

de vida autónomo, a fin de facilitar que los gobernados participen activamente en la vida democrática. De esta forma, el goce del mínimo vital es un presupuesto sin el cual las coordinadas centrales de nuestro orden constitucional carecen de sentido, de tal suerte que la intersección entre la potestad Estatal y el entramado de derechos y libertades fundamentales consiste en la determinación de un mínimo de subsistencia digna y autónoma protegido constitucionalmente. Este parámetro constituye el contenido del derecho al mínimo vital, el cual, a su vez, coincide con las competencias, condiciones básicas y prestaciones sociales necesarias para que la persona pueda llevar una vida libre del temor y de las cargas de la miseria, de tal manera que el objeto del derecho al mínimo vital abarca todas las medidas positivas o negativas imprescindibles para evitar que la persona se vea inconstitucionalmente reducida en su valor intrínseco como ser humano por no contar con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna. Así, este derecho busca garantizar que la persona -centro del ordenamiento jurídico- no se convierta en instrumento de otros fines, objetivos, propósitos, bienes o intereses, por importantes o valiosos que ellos sean."

En efecto, dentro de las bases constitucionales mínimas del derecho a la seguridad social se encuentran las prestaciones que constituyen un apoyo suficiente a los ingresos de las personas que se encuentran en el supuesto de recibir una pensión por parte de un familiar fallecido que resultaba ser servidor público, sin embargo, resulta infundado el agravio relativo hecho valer por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, pues debe tomarse en cuenta que las normas de seguridad social constituyen garantías y derechos establecidos en atención a la vulnerabilidad de las personas por distintas contingencias, sin que dichos derechos impliquen que el Estado otorgara las diferentes pensiones en un cien por ciento o conforme a las necesidades de cada individuo en particular, dado que esa obligación se proyecta únicamente sobre la necesidad de que el Estado garantice la disponibilidad de ciertas prestaciones.

Lo anterior, porque si bien, el derecho al goce del mínimo vital debe garantizarse para que los gobernados y sus beneficiarios puedan llevar una vida libre de temor y de las cargas de la miseria que les permita subsistir, lo cierto es que a través de la Ley reclamada no se suprimió el derecho a recibir una pensión en caso de fallecimiento, ni los otros derechos de seguridad social consagrados en la ley que le antecede, de tal forma, que no puede aceptarse el argumento de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, pues las condiciones tuteladas en la nueva Ley que hoy se tilda de Inconstitucional, no suprimieron el derecho constitucional al mínimo vital que puedan gozar los beneficiarios del trabajador, sino que se modificaron atendiendo a que el derecho de la seguridad social encuentra sus bases en el principio de solidaridad, lo que significa también, la protección del sistema financiero del Instituto como ente obligado, pero ello no significa que los asegurados pierdan sus derechos a recibir sus pensiones y otros derechos.

Por tanto, los límites al ejercicio del derecho a la seguridad social que se previeron en la Ley hoy reclamada por supuesta inconstitucionalidad, tienen como propósito la protección de la fuente de financiamiento del Instituto y el futuro resguardo y protección de los derechos de los trabajadores del Estado, así como de sus beneficiarios, dado que éste hace frente a las obligaciones que tiene con el resto de los asegurados, por tanto, está justificado, ya que el sistema de pensiones no puede analizarse desde la óptica del interés individual uno o varios



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

trabajadores, sino como el bienestar de la sociedad en general, sin menoscabo de reconocer los derechos de los trabajadores.

Es decir, si bien constitucionalmente los asegurados gozan del derecho a la seguridad social previsto en la Norma Suprema, garantizándose siempre el mínimo vital, cuyo concepto ya hemos abordado, lo cierto es que el ejercicio a la seguridad social, se basa en el principio de solidaridad, que implica que se debe privilegiar la protección de los recursos con los que el Instituto debe hacer frente a las prerrogativas de todos los trabajadores y pensionados que son derechohabientes.

En mérito de robustecer lo anteriormente mencionado, me permito mencionar de manera análoga al caso concreto, el siguiente precepto jurisprudencial, mismo que de manera ilustrativa demuestra que en salvaguarda de los derechos de seguridad social de los trabajadores y de sus beneficiarios, este poder legislativo en su libertad de configurar y relacionado con el principio de solidaridad anteriormente analizado, al emitir la Ley reclamada de inconstitucional por la parte quejosa no contraviene con al mínimo vital que puedan gozar por medio de las pensiones a las que son acreedoras:

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Registro digital: 2013872

Instancia: Segunda Sala

Décima Época

Materias(s): Constitucional, Administrativa

Tesis: 2a./J. 27/2017 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 40, Marzo de 2017, Tomo II, página 821

Tipo: Jurisprudencia

RENTA. EL ARTÍCULO 151, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014, AL ESTABLECER UN LÍMITE PARA LAS DEDUCCIONES PERSONALES, NO VIOLA EL DERECHO AL MÍNIMO VITAL. Las deducciones personales de las personas físicas, al no cumplir con el requisito de necesaria vinculación de las erogaciones con la generación del ingreso, no deben reconocerse forzosamente por el legislador como aminoraciones para determinar la base gravable del impuesto, sino que se encuentran inmersas en el ámbito de libertad de configuración en materia tributaria por constituir gastos fiscales, los cuales tienen su origen en la disminución o reducción de gravámenes, traduciéndose en la no obtención de un ingreso público como consecuencia de la concesión de beneficios fiscales orientados al logro de la política económica o social. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el derecho al mínimo vital abarca todas las acciones positivas y negativas que permitan respetar la dignidad humana, lo que implica la obligación para el Estado de garantizar (y no necesariamente otorgar la prestación de manera directa) que los ciudadanos tengan acceso generalizado a alimentación, vestido, vivienda, trabajo, salud, transporte, educación, cultura, así como a un medio ambiente sano y sustentable; aunado a ello, debe garantizar atención a los incapacitados o a las personas con necesidades especiales o específicas, procurando su incorporación a la vida activa. Lo anterior, correlacionado con el principio de generalidad tributaria (la regla general consiste en que todos aquéllos, con un nivel económico mínimo, están obligados a contribuir al sostenimiento del gasto público, mientras que las exenciones, beneficios o estímulos fiscales son la excepción), permite concluir válidamente que la circunstancia de que los conceptos con los cuales se relacionan las deducciones



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

personales tengan alguna vinculación con derechos fundamentales o servicios básicos que el Estado se encuentra obligado a garantizar o prestar, no implica que exista un derecho constitucionalmente tutelado para exigir que sea precisamente a través de la legislación fiscal que se brinde esa tutela, específicamente concediendo un beneficio de carácter tributario al prever la posibilidad de deducir, sin limitante alguna, cantidades o erogaciones que no están vinculadas con la generación del ingreso que es el objeto del impuesto sobre la renta.

Por lo anterior, evidentemente fue tergiversado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, puesto que pretende reclamar una supuesta transgresión al derecho del mínimo vital, pasando por alto que lo que se pretendió con la reforma a la Ley reclamada, fue evitar los riesgos que imposibiliten que el Instituto pueda financiar las pensiones concedidas a los asegurados, estableciendo ciertas limitaciones atendiendo a su estado financiero y recursos presupuestales.

Al analizar el concepto de solidaridad en materia de seguridad social y su evolución normativa nuestro Alto Tribunal estableció que en el ámbito de los trabajadores al servicio del Estado, el concepto de "solidaridad" se traduce en el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado en sí mismo considerado y en su calidad de patrón para garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respectivas, esto es, las pensiones por retiro, por invalidez o incapacidad y muerte; servicios de salud, turísticos y de recuperación y vivienda barata; y de protección a quienes menos tienen mediante una distribución equitativa de las cargas económicas.

26

Se afirmó entonces que la solidaridad social no implica que el Estado deba financiar y administrar las prestaciones inherentes a la seguridad social y menos aún que sea su obligación otorgar dichas prestaciones y que tampoco implica que los beneficios de los pensionados (renta vitalicia y asistencia médica) deban cubrirse necesariamente con las cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo y con la ayuda subsidiaria del Estado.

En consecuencia, se dijo, el principio de solidaridad en materia de seguridad social implica, en términos generales, garantizar el otorgamiento de las prestaciones a que tienen derecho por mandato constitucional todos los trabajadores para asegurar su bienestar y el de su familia, en especial de los que obtienen menos ingresos, todo eso mediante una distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para lograr tal fin.

Corroborar lo expuesto, en lo conducente, el criterio que informa la jurisprudencia P./J. 109/2008 de este Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVIII, octubre de 2008, página 8, que establece:

ISSSTE. CONCEPTO DE SOLIDARIDAD PARA EFECTOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ABRIL DE 2007). De la exposición de motivos de la Ley de Pensiones Civiles de 1947, se advierte que la intención del legislador al crear a la Dirección de Pensiones (antecesora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado) como un organismo descentralizado y dotarlo de facultades de inversión de los recursos obtenidos por las cuotas y aportaciones de seguridad social, fue la de eximir al Estado como tal, de la obligación de otorgar los beneficios respectivos, el cual únicamente estaría obligado a cubrir las aportaciones correspondientes en su carácter de patrón, según se desprende de la parte conducente de dicha exposición, que se lee:



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

"Como consecuencia de la descentralización que se otorga a pensiones y de la posibilidad de inversiones productivas de que se le dota, será la misma Institución la que reporte el pago de su propio presupuesto, exonerando en consecuencia de esa carga al erario federal, quien únicamente quedará obligado a las aportaciones por las sumas iguales a los descuentos hechos para el fondo de los trabajadores al servicio del Estado". Lo anterior se corrobora si se toma en consideración que la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de 1983, en su artículo 177 imponía a las dependencias y entidades el deber de cubrir, en la proporción que a cada una corresponda, el déficit que llegara a existir en el Instituto y le impidiera cumplir con sus obligaciones -como lo es el pago de las pensiones-, no así al Estado como tal. Por otra parte, en el ámbito de la seguridad social de los trabajadores del Estado, el concepto de "solidaridad" se traduce en el esfuerzo conjunto de los trabajadores y del Estado en sí mismo considerado y en su calidad de patrón para garantizar el otorgamiento de las prestaciones constitucionales mínimas respectivas (pensiones por retiro, por invalidez o incapacidad y muerte; servicios de salud, turísticos y de recuperación y vivienda barata) y proteger a quienes menos tienen, mediante una distribución equitativa de las cargas económicas. Por ello, la solidaridad social no implica que el Estado deba financiar y administrar las prestaciones inherentes a la seguridad social y menos aún que sea su obligación otorgar dichas prestaciones. Tampoco implica que los beneficios de los pensionados (renta vitalicia y asistencia médica) necesariamente deban cubrirse con las cuotas y aportaciones de los trabajadores en activo (sistema de reparto) y con la ayuda subsidiaria del Estado. En esa virtud, el nuevo régimen de seguridad social que prevé la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente a partir del 1o. de abril de 2007, atiende al referido principio de solidaridad social, en la medida en que el sistema diseñado por el legislador ordinario garantiza el otorgamiento de las prestaciones a que constitucionalmente tienen derecho todos los trabajadores para asegurar su bienestar y el de su familia, en especial de los que obtienen menos ingresos, mediante una distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para ello.

27

Lo expuesto evidencia, en principio, que es inexacto lo argumentado de la promovente al afirmar que *"al afectarse el derecho a la seguridad social, se afecta de igual manera, al mínimo vital, a la familia, a una jubilación digna, entre otros, toda vez que su salvaguarda depende de la realización de los demás derechos"*, pues, como se dijo, el principio de solidaridad por el que corresponde al Estado financiar, administrar y otorgar servicios y beneficios que prevé el propio ordenamiento, se garantiza mediante la distribución equitativa de los recursos económicos necesarios para lograr tal fin y en conjunto con los involucrados.

Sin soslayar, que la normatividad reclamada por la parte quejosa en la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán contenida en el Decreto 532/2022 por el que se expidió dicho ordenamiento, resulta ser constitucionalmente válida, puesto que cumple con otorgar la seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece las bases mínimas que debe contener todo cuerpo normativo en materia de seguridad social, las cuales son:

"Artículo 123:



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

...

A...

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

I...

X...

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadoras habitaciones baratas, en arrendamiento o venta, conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos respectivos

...

Ahora bien, asentado lo anterior y concatenado a lo mencionado en líneas precedentes, me permito manifestarme respecto al infundado argumento manifestado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado Yucatán por la supuesta desprotección a los beneficiarios de los trabajadores en el caso de su fallecimiento en relación a pensiones que percibirán, el cual hizo valer en los términos siguientes:

"... la regresión que se tiene en el reconocimiento del derecho de pensión por fallecimiento, puesto que la Ley de Seguridad Social pere los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, de sus Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal publicada en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán en fecha diez de septiembre del año mil novecientos noventa y



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

seis, abrogada, no preveía en ninguno de sus artículos la disminución de la pensión otorgada a la persona beneficiaria por fallecimiento de alguna persona trabajadora, servidora pública, situación que si se prevé en la norma impugnada, tal como puede apreciarse en la tabla que precede, ya que en un período de 6 años se pierde hasta el 50% del monto estipulado para la pensión otorgada. Cabe mencionar, que va acorde al monto que recibía la persona titular, lo anterior se traduce que en caso de que la persona fallecida tuviera el 80% de pensión conforme a su salario, la persona beneficiaria de esta pensión a lo largo de los 6 años, únicamente estaría recibiendo el 40% del monto total de la pensión, pues lo anterior equivaldría al 50% de reducción sobre el monto otorgado”.

Respecto a la referida disminución de la pensión de fallecimiento, esta se encuentra en plena armonía con el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que resulta legal y constitucional la aplicación del mismo.

Se dice lo anterior, porque el derecho a la seguridad social está reconocido en el artículo 123, apartado B fracción XI, inciso a) de la Constitución, sin embargo, únicamente se establece la jubilación como una de las bases mínimas que deben de observarse en materia de seguridad social para los trabajadores del Estado, esto acorde con los instrumentos internacionales, como son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Protocolo de las Reformas a la Carta de la Organización de los Estados Americanos (Protocolo de Buenos Aires), el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

29

Es por lo anterior, que resulta equivocado el argumento de la parte quejosa, respecto de la supuesta inconstitucionalidad de la Ley reclamada, ya que como se ha manifestado en los párrafos precedentes, este se encuentra en total apego a lo establecido en la Carta Magna así como a Tratados Internacionales, por lo que en consecuencia, no existe ninguna violación o afectación al derecho de los trabajadores ni de sus beneficiarios, así como tampoco existe transgresión a la supremacía constitucional como erróneamente aduce.

Aunado a lo anterior, se suma que mientras la esperanza de vida para el año en que se expidió la ley abrogada, apenas rebasaba los 50 años de edad, en la actualidad, los avances de la ciencia en materia de salud, han incrementado esa expectativa al menos a los 75 años de edad, de igual forma las pensiones son transferibles a los beneficiarios a la muerte del titular, lo que genera que después de la muerte de los trabajadores, dicho beneficio se siga generando a lo largo de más de 30 años, ocasionando un desequilibrio entre los ingresos y los egresos del sistema de seguridad social, de ahí que financieramente no es viable mantener el anterior sistema, por lo que el aumento de los requisitos para acceder a las prestaciones de seguridad social tienen una justificación jurídica y socialmente válida.

Por lo anteriormente estimado, resulta inconcuso el alegar la inconstitucionalidad de la norma en relación a que esta represente una violación a los derechos humanos de los trabajadores el servicio del estado y mucho menos de sus beneficios, toda vez que con la emisión de la norma en cuestión, se respetó en todo momento el derecho del goce al mínimo vital en materia de seguridad social, siendo que además no representa una regresión en los derechos de los trabajadores en transición al no encajar en los supuestos en los que se les



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

debe considerar como sujetos de derechos previamente adquiridos durante el tiempo que han laborado, más aún en los derechos que supuestamente debieron obtener sus beneficiarios a causa de fallecimiento estando en la situación en que este se encuentre con vida al momento en que la norma entró en vigor.

TERCERO.- El concepto de invalidez tercero hecho valer por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, en el cual manifiesta que el decreto impugnado viola la obligación del Estado de analizar circunstancias concretas, deviene totalmente de infundado, pues carecen de cualquier fundamento y motivación.

Resultan infundados los argumentos esgrimidos en relación a que el Decreto 532/2022 por el que se emite la Ley de Seguridad Social para los trabajadores del Estado de Yucatán debe ser catalogado de inconstitucional debido a que según la errónea interpretación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, al momento de su análisis y creación, no se tomaron en cuenta las circunstancias del contexto social del Estado y de sus trabajadores, toda vez que decide ignorar que la Ley en cuestión efectivamente fue estudiada, analizada y elaborada tomando en consideración la situación actual por la que pasa el Instituto de Seguridad Social del Estado de Yucatán, así como las necesidades presentes y futuras con las que cuentan los trabajadores del Estado y de sus beneficiarios, a fin de que estos no queden desprotegidos en el goce de un sustento económico en un futuro, debido a la crisis económica que afronta el mismo Instituto.

Mencionado lo anterior, resulta necesario exponer las siguientes consideraciones:

La reforma de la **Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, publicada mediante el decreto 532/2022**, se planificó con la finalidad de mantener finanzas estables capaces de afrontar el reto continuo de crecimiento poblacional, y al mismo tiempo cumplir con la capacidad de mantener el esquema pensionado, dando así cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano.

Reiterando que el objetivo central de la ley reclamada, como del espíritu legislativo fue el garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras, con el conocimiento de que el objetivo solo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa, como se plantea a lo largo de la multicitada ley.

En ese sentido, para generar la sustentabilidad financiera y operativa, se requirió una modificación sustancial al esquema pensionario, toda vez que el mismo quedó rebasado y resultaba inviable, debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, el mal diseño del sueldo regulador, así como la insuficiencia de aportaciones.

Por lo anterior, en el presente caso se debe analizar el beneficio de que efectivamente se aplique la norma, es decir si es particular o colectivo, a lo que en cuanto a esta norma en específico se considera de carácter colectiva pues tal y como se sustenta en la propia exposición de motivos de la Ley alegada con un criterio unilateral por la parte quejosa de inconstitucional, estas medidas surgen para estabilizar o capitalizar al Instituto de seguridad como actual órgano encargado de prever las pensiones actuales y futuras a todos los trabajadores del Estado, por lo que de a primeras se percibe que es un beneficio en pro de la colectividad y no de alguien en particular, situación por la cual y de aplicar una ponderación para ver qué derechos y medidas deben prevalecer si la de algunos de los trabajadores al servicio del estado o el de todos los demás se puede determinar que es necesario y favorable



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

seguir con la aplicación de la Nueva ley expedida, pues esta garantiza y asegura el pago de las pensiones actuales y futuras de los trabajadores.

Como se mencionó con anterioridad, a raíz de que el sistema pensionario en el Estado de Yucatán se encontraba en un punto crítico, dado a diversos factores como el incremento poblacional el cual es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, se estimó que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significaría un desbalance en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY), por lo que ante tal situación, era preciso modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, ya que el mismo ha quedado rebasado y actualmente resulta inviable debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, mal diseño de un sueldo regulador o la insuficiencia de aportaciones, factores que representan un cambio descomunal en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema pensionario vigente, situación que de continuar así, únicamente generaría un colapso financiero y una ruínosa descapitalización, toda vez que el importe de los egresos por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones, seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones, por lo que es necesario una adaptación a lo tiempo modernos que permitan una mayor rentabilidad presupuestal a mayor tiempo.

31

Por ello, a la eventualidad del citado colapso financiero que impediría salvaguardar los derechos fundamentales de seguridad social de los trabajadores derechohabientes del sistema local de seguridad social, se consideró en la exposición de motivos del decreto impugnado también que:

... "es menester reestructurar y desarrollar un sistema pensionario que permita su funcionamiento a lo largo de los años, buscando el mayor plazo de vida sostenible de dicho sistema, a la par que se procure un perfeccionamiento que permita determinar con anticipación los problemas que puedan surgir e implementar acciones tendientes a su modificación, evitando una afectación a la estabilidad del sistema, ya que de no tratarse de manera oportuna, puede debilitarse, como desafortunadamente ha sucedido con diversos sistemas pensionarios a nivel nacional, que a la fecha, se encuentran en estado crítico y con una desesperada necesidad de actualización"...

Por lo que, considerando a su vez que:

"la seguridad social es un derecho humano y este derecho consagrado a las personas, se convierte en una responsabilidad para el gobierno, por lo que con el propósito de continuar cumpliendo eficazmente con sus obligaciones el ISSTEY, como lo es el de garantizar sus prestaciones de seguridad social a sus derechohabientes y sus beneficiarios, es que planteó esta reforma de fondo para renovar el marco jurídico, a efecto de restaurar a esa institución y disminuir la presión financiera por la que atraviesa ese Instituto, y así otorgarle mayores esperanzas a los trabajadores de recibir una pensión digna y de conservar su fuente de trabajo.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Toda vez que, desde la creación del instituto, resulta innegable que las condiciones económicas, demográficas y recaudatorias de los últimos años ya son muy distintas a las que existían cuando se creó, por ello, es necesario, tomar medidas correctivas que modifiquen las condiciones, montos y requisitos de las pensiones del sistema actual, ya que de continuar bajo el mismo esquema caería en una ruinoso descapitalización, pues el importe de los egresos por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones, seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones.

Por consiguiente, con la presente ley que se somete a consideración, se fijan acciones determinantes encaminadas a conseguir un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, los cuáles en su conjunto permitan una viabilidad financiera al sistema de pensiones actual y, por consiguiente, tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado."

Ahora bien, ante la posibilidad de dejar de cumplir y velar por los derechos fundamentales, se implementaron las medidas necesarias para salvaguardarlos, optando por la modificación al marco jurídico que permitiera garantizar la viabilidad del sistema financiero de seguridad social, lo cual no acarrea una inconstitucionalidad y una trasgresión a los principios de progresividad e irretroactividad, ya que de no haber realizado una modificación a la ley que rige a mi representado, se hubiera dejado de atender los derechos humanos de todos los derechohabientes y sus familias, por ello, la emisión del decreto en cuestión se encontraba en una situación de necesidad a fin de seguir velando por los derechos de los trabajadores y de sus beneficiarios.

De igual manera, en el caso concreto, el Legislador Yucateco al expedir la nueva ley, justificó cabalmente en la exposición de motivos los aspectos que motivaron la reestructura del sistema pensionario, buscando en todo momento darle una sustentabilidad financiera al sistema pensionario de los trabajadores del Estado, y con ello, asegurar el pago de las pensiones presentes y futuras.

A continuación, se transcriben las partes medulares de la exposición de motivos donde quedó plenamente justificada la necesidad de modificar el sistema pensionario:

"...SEGUNDA. Puntualizado lo anterior, de la iniciativa en estudio se extrae que busca un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, el cual se traduzca en otorgar viabilidad al sistema de pensiones actual y, por consiguiente, tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado.

*...
CUARTA...*

Sí bien, con el paso del tiempo la ley en comento ha tenido diversas modificaciones, se considera que estas han sido insuficientes para establecer las condiciones necesarias para la sustentabilidad financiera y operativa que requiere el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán para garantizar que el sistema pensionario en el Estado pueda continuar de una manera eficaz y positiva.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

El sistema pensionario en el estado de Yucatán se encuentra en un punto crítico, tal y como se infiere de la exposición de motivos de la iniciativa de ley que nos atañe, pues se menciona que el incremento poblacional es superior a la capacidad que los diferentes esquemas de pensiones pueden soportar, ya que se estime que dentro de los próximos años el número de personas en edad de jubilación aumente de manera exponencial, lo que significará un desbalance en el presupuesto del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.

Ante tal situación, es necesario modificar sustancialmente el esquema pensionario existente de los trabajadores al servicio del Estado, ya que este ha quedado rebasado y actualmente resulta inviable debido al incremento en la esperanza de vida, el decremento en la tasa de crecimiento de nuevos trabajadores, mal diseño del sueldo regulador o la insuficiencia de aportaciones, factores que representan un cambio descomunal en las circunstancias que existían al momento de planear el sistema pensionario vigente, situación que de continuar así, únicamente generaría un colapso financiero ante la falta de adaptabilidad a los tiempos modernos que permitan una mayor rentabilidad presupuestal a mayor tiempo.

En el estado de Yucatán no puede permitirse un sistema de pensiones debilitado, por lo que se requiere planificar un nuevo sistema que le permita al ente público mantener unas finanzas estables capaces de afrontar el reto del continuo crecimiento poblacional, el mismo tiempo que sea capaz de mantener dicho esquema por un tiempo cada vez mayor, dando así cumplimiento a la obligación del Estado de reconocer la seguridad social, como derecho humano.

En esa tesitura, es menester reestructurar y desarrollar un sistema pensionario que permita su funcionamiento a lo largo de los años, buscando el mayor plazo de vida sostenible de dicho sistema, a la par que se procure un perfeccionamiento que permite determinar con anticipación los problemas que puedan surgir e implementar acciones tendientes a su modificación, evitando una afectación a la estabilidad del sistema, ya que de no tratarse de manera oportuna, puede debilitarse, como desafortunadamente ha sucedido con diversos sistemas pensionarios a nivel nacional, que a la fecha, se encuentran en estado crítico y con una desesperada necesidad de actualización.

Otra de las problemáticas que motivan este proyecto de ley, es la situación que enfrenta el instituto respecto de la falta de financiamiento histórico, el cual compromete su viabilidad financiera. Asimismo, en la actualidad el ramo de seguridad social gasta más de lo que percibe por el concepto de cuotas y aportaciones, por tanto, es necesario ir incrementando su cobertura y mejorar el servicio; por lo que se considera oportuno el aumento de las cuotas y aportaciones provenientes tanto de las entidades públicas como de las personas servidoras públicas.

QUINTA. En tal virtud, tenemos que la iniciativa de ley tiene como objetivo central, garantizar el pago de las pensiones actuales y futuras con el conocimiento de que este objetivo sólo podrá cumplirse dentro del marco de un sano financiamiento, soportado por las aportaciones de las entidades públicas patronales y los afiliados, en la forma gradual y equitativa que se detalla en la iniciativa en comento, así como la modificación de otros parámetros que son necesarios para darte viabilidad financiera al sistema pensionario.



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

...
Cabe destacar que, este proyecto de ley que se propone, es resultado de una amplia consulta que tuvo a bien realizar previamente esta Comisión Especial con la participación de diversos sindicatos de trabajadoras, representantes patronales y demás entes que serán sujetos a la misma; por lo que, derivado del análisis y diagnóstico actuarial realizado al sistema de pensiones en comento, así como de las consecuencias que podrían derivar la falta de ajustes al marco normativo estatal en materia de seguridad social, se evidenció la necesidad de llevar a cabo este proyecto de iniciativa de ley, esto con motivo de que existe una insuficiencia de aportaciones por parte de las entidades públicas, mismos que se han venido acumulando pasivos desde administraciones pasadas, que han sido difíciles de recuperar.

Es importante tener en consideración los impactos que este proyecto de ley representa; sin embargo, resulta necesario emitir un ordenamiento que cumpla con las exigencias y necesidades sociales, económicas y financieras actuales, por lo que dichos cambios se realizarán de manera gradual, objetiva y respetando los derechos con los que cuentan las personas trabajadoras de la entidad.

...
OCTAVA. En virtud de todo lo anterior, quienes integramos esta Comisión Especial, hemos de concluir, que esta Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, significa un gran avance en la materia; ya que, como se ha señalado, la seguridad social es un derecho humano y este derecho consagrado a las personas, se convierte en una responsabilidad para el gobierno, por lo que con el propósito de continuar cumpliendo eficazmente con sus obligaciones el ISSTEY, como lo es el de garantizar sus prestaciones de seguridad social a sus derechohabientes y sus beneficiarios, es que plantea esta reforma de fondo para renovar el marco jurídico, a efecto de restaurar a esa institución y disminuir la presión financiera por la que atraviesa ese Instituto, y así otorgarle mayores esperanzas a los trabajadores de recibir una pensión digna y de conservar su fuente de trabajo.

Toda vez que, desde la creación del instituto, resulta innegable que las condiciones económicas, demográficas y recaudatorias de los últimos años ya son muy distintas a las que existían cuando se creó, por ello, es necesario, tomar medidas correctivas que modifiquen las condiciones, montos y requisitos de las pensiones del sistema actual, ya que de continuar bajo el mismo esquema caería en una ruinoso descapitalización, pues el importe de los egresos por concepto de pensiones, jubilaciones y distintas prestaciones, seguirá creciendo hasta alcanzar niveles económicamente inaceptables, poniendo en riesgo la seguridad económica de los pensionados actuales y futuros e incluso la fuente de trabajo que da origen al sistema de pensiones.

Por consiguiente, con la presente ley que se somete a consideración, se fijan acciones determinantes encaminadas a conseguir un equilibrio entre los aspectos financiero, económico y social, los cuáles en su conjunto permitan una viabilidad financiera al sistema de pensiones actual y, por consiguiente, tratar de asegurar las futuras pensiones de los trabajadores del Estado."



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Asimismo, a fin de contravenir lo argumentado por la parte quejosa por una supuesta falta de atención a la necesidad colectiva y su contexto social actual, como se ha mencionado en los antecedentes del presente escrito, como parte de las medidas tomadas ante la falta de recursos, el H. Congreso Legislativo del Estado, instauró una Comisión Especial para la Atención de la Situación del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán, con la finalidad de trabajar en unión con diversos sindicatos de trabajadores, representantes patronales y demás entes que son sujetos de afectación ante la situación que sobrellevaba el Instituto, demostrando de esta manera el compromiso por parte de este órgano legislativo con la sociedad y sus necesidades a fin de conservar sus derechos y que esta colectividad pueda alcanzar una situación favorable que efectivamente garantice un sustento económico para los mismos trabajadores, así como de sus beneficiarios.

Por otro lado, dentro de las sesiones llevadas a cabo por la Comisión Especial para la Atención de la Situación del ISSTEY, las cuales pueden ser consultadas por la ciudadanía en las diferentes plataformas y redes sociales que utiliza el H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante su gaceta parlamentaria, se realizaron diversos análisis y diagnósticos de varios estudios actuariales, los cuales reflejaron la realidad de cómo se encuentran las finanzas de esta Entidad, lo que sirvió de sustento a los diputados y diputadas, para denotar la necesidad de realizar una reforma que permita asegurar a largo plazo que el Instituto cumpla con su objetivo de brindar seguridad social.

35

En atención a lo anterior, es menester el hacer mención que en aras de una correcta de preservación de derechos y beneficios para los trabajadores del Estado, se optó por modificar el marco legal en materia de Seguridad Social para los mencionados trabajadores, y en atención a la facultad configurativa de los Estados para legislar siempre y cuando esta no contravenga principios generales y derechos fundamentales, se puede inferir que la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán y en los artículos transitorios del Decreto 532/2022 por el que se expidió dicho ordenamientos, resultan ser constitucionalmente válidas, puesto que cumplen con otorgar la seguridad social contenida en el artículo 123, apartado B, fracción XI de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, que establece las bases mínimas que debe contener todo cuerpo normativo en materia de seguridad social. Ahora bien, aunado a lo mencionado por la suscrita en líneas precedentes, es necesario que relacionando a la expuesta crisis por la que se afronta actualmente la situación del Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de Yucatán, concatenado con la citada facultad configurativa del Estado para legislar, me permito exponer lo siguiente:

A pesar que por los argumentos anteriormente expuestos en el presente escrito, los cuales demuestran cabalmente que el Decreto por el que se emite la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán no contraviene principios ni derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución Política, por ello, se concluye que si bien, existen los señalamientos por parte de la parte quejosa de que la norma atacada conlleva la violación al principio de progresividad, en su vertiente de no regresión, este no es el caso, ya que el legislador, ante la eventualidad de que el instituto obligado dejara de cumplir sus obligaciones en materia de seguridad social por completo, en grave y amplio perjuicio de la base derechohabiente, la autoridad de forma responsable implementó las medidas necesarias para salvaguardarlos a futuro de forma viable y sustentable, a través de la expedición de la norma, hoy reclamada, tal y como se justificó en el Dictamen de la misma.



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Cabe mencionar que según nuestra Carta Magna, existen excepciones a los principios de progresividad, los cuales, aun y el caso en concreto no se encuentre en alguno de los supuestos al no violentar dicho principio, su estudio resulta de importante para el presente asunto.

Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte, se pronunció respecto de las excepciones al principio de progresividad, siendo la jurisprudencia siguiente:

Registro digital: 2015304

Instancia: Primera Sala

Décima Época

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a./J. 87/2017 (10a.)

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación.

Libro 47, Octubre de 2017, Tomo I, página 188

Tipo: Jurisprudencia

PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS DERECHOS HUMANOS. LA PROHIBICIÓN QUE TIENEN LAS AUTORIDADES DEL ESTADO MEXICANO DE ADOPTAR MEDIDAS REGRESIVAS NO ES ABSOLUTA, PUES EXCEPCIONALMENTE ÉSTAS SON ADMISIBLES SI SE JUSTIFICAN PLENAMENTE. El principio referido impone al Estado, entre otras cuestiones, la prohibición de regresividad, la cual no es absoluta y puede haber circunstancias que justifiquen una regresión en cuanto al alcance y tutela de un determinado derecho fundamental. Sin embargo, dichas circunstancias están sujetas a un escrutinio estricto, pues implican la restricción de un derecho humano. En este sentido, corresponde a la autoridad que pretende realizar una medida regresiva (legislativa, administrativa o, incluso, judicial) justificar plenamente esa decisión. En efecto, en virtud de que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades del Estado Mexicano la obligación de respetar el principio de progresividad, cuando cualquier autoridad, en el ámbito de su competencia, adopta una medida regresiva en perjuicio de un derecho humano y alega para justificar su actuación, por ejemplo, la falta de recursos, en ella recae la carga de probar fehacientemente esa situación, es decir, no sólo la carencia de recursos, sino que realizó todos los esfuerzos posibles para utilizar los recursos a su disposición, en el entendido de que las acciones y omisiones que impliquen regresión en el alcance y la tutela de un derecho humano sólo pueden justificarse si: a) se acredita la falta de recursos; b) se demuestra que se realizaron todos los esfuerzos necesarios para obtenerlos, sin éxito; y, c) se demuestra que se aplicó el máximo de los recursos o que los recursos de que se disponía se aplicaron a tutelar otro derecho humano (y no cualquier objetivo social), y que la importancia relativa de satisfacerlo prioritariamente, era mayor. Esto es, si bien es cierto que las autoridades legislativas y administrativas tienen, en ciertos ámbitos, un holgado margen de actuación para diseñar políticas públicas, determinar su prioridad relativa y asignar recursos, también lo es que dicha libertad se restringe significativamente cuando está en juego la garantía de los diversos derechos humanos reconocidos por nuestro sistema jurídico, ya que éstos, en tanto normas que expresan el reconocimiento de principios de justicia de la máxima



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

importancia moral, tienen prioridad prima facie frente a cualquier otro objetivo social o colectivo, pues en una sociedad liberal y democrática, estos últimos tienen solamente valor instrumental y no final, como los derechos humanos.

Gracias la lectura a de la jurisprudencia anterior, se concluye que en el caso de que sea necesaria una regresión en el alcance de un derecho humano, lo cual no ocurrió en el caso concreto tal y como se ha demostrado, es viable y jurídicamente aceptable siempre y cuando se justifique en el alcance y tutela de un determinado derecho fundamental, siendo que como se ha manifestado anteriormente, se procuró el derecho a la seguridad social colectivo, por encima del individual.

En relación a lo anterior, conviene señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 6096/2014, referente a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, consideró lo siguiente:

"Ahora, respecto del Segundo de los supuestos mencionados, el Pleno de este Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 366/2013, sostuvo que el principio de progresividad –en su vertiente de prohibición de regresividad– no es de carácter absoluto, de ahí que para determinar si una medida materialmente legislativa respeta dicho principio, "resulta necesario tomar en cuenta si dicha disminución tiene como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano del que son titulares personas diversas, lo cual permite atender a una interpretación integral del marco constitucional". En otras palabras "es necesario analizar si ésta [medida] genera un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos, pues de lo contrario se tratará de una legislación regresiva".

37

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha reconocido que las medidas regresivas no son en sí y por sí mismas inconvenientes, sin embargo, dichas medidas requieren de una consideración más cuidadosa y deberán justificarse plenamente, de ahí que "para evaluar si una medida regresiva es compatible con la Convención Americana, se deberá determinar si se encuentra justificada por razones de suficiente peso".

Por su parte, la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos ha señalado que "la restricción en el ejercicio de un derecho no es sinónimo de regresividad", toda vez que la obligación correlativa de no regresividad, establecida en el artículo 26 de la Convención Americana, no excluye la posibilidad de que un Estado imponga ciertas restricciones al ejercicio de los derechos incorporados en esa norma. De tal suerte que la "obligación de no regresividad implica un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida. En ese sentido, no cualquier medida regresiva es incompatible con el artículo 26 de la Convención Americana".

En suma, el principio de progresividad de los derechos humanos no es absoluto, por lo que es admisible que el Estado Mexicano incurra en la adopción de medidas regresivas siempre y cuando: (I) dicha disminución



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

tenga como finalidad esencial incrementar el grado de tutela de un derecho humano; y (II) generen un equilibrio razonable entre los derechos fundamentales en juego, sin afectar de manera desmedida la eficacia de alguno de ellos. En ese sentido, el análisis de no regresividad conlleva a que el operador jurídico realice un análisis conjunto de la afectación individual de un derecho con relación a las implicaciones colectivas de la medida, a efecto de determinar si la medida regresiva se encuentra justificada por razones de suficiente peso.

En la iniciativa de la aludida legislación, el Gobierno de esta entidad federativa, como exposición de motivos, formuló diversos argumentos para justificar la necesidad de promulgar una nueva ley de seguridad social:

Las conclusiones a las que llegó el Tribunal Colegiado se estiman acertadas al considerar que el derecho de seguridad social relativo a la jubilación de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado de México ha sido reconocido desde épocas anteriores y el órgano legislativo, a fin de promover, respetar, proteger y garantizar este derecho fundamental, ha ido adecuando durante el transcurso del tiempo las disposiciones normativas que lo regulan, acorde a la realidad social prevaleciente de cada época.

38

De este modo, conforme han ido cambiando las circunstancias socioeconómicas-culturales y las necesidades de los servidores públicos del Estado de México, así como las condiciones del propio Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, el legislador ha emitido las disposiciones que ha considerado indispensables e idóneas con objeto de procurar el funcionamiento y continuidad de dicho instituto, el cual es el órgano descentralizado encargado de otorgar a los derechohabientes las prestaciones de seguridad social que les han sido reconocidas.

Ello es así, pues las normas que rigen al Estado deben responder precisamente al contexto social que imperará en la población a que van dirigidas, ya que de otro modo carecería de sentido y eficacia, por lo que resultarían inútiles.

*Así, el Tribunal Colegiado dijo advertir que el órgano legislativo, **sin desconocer el derecho social de jubilación de los servidores públicos al servicio del Gobierno del Estado de México**, ha ido modificando, según la realidad de las necesidades sociales y económicas imperantes, los lineamientos establecidos para hacer efectivo ese derecho fundamental, como lo son la edad y el tiempo de servicio cotizado que debe cumplir la persona que pretenda verse beneficiada por esta prerrogativa, así como las condiciones y supuestos en que debe de cumplimentarse, entre los que se encuentra también el modo en que debe cuantificarse el monto de la pensión correspondiente.*



LXII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

Así en forma acertada refirió el Tribunal Colegiado, que si bien es cierto que la ley vigente en mil novecientos noventa y cuatro, a que alude la quejosa, disponía como requisitos para obtener una pensión, a los de cincuenta y cinco años de edad, y quince de cotizaciones, mientras que la diversa de dos mil dos, imponía los de sesenta años de edad y cuando menos diecisiete de servicio y cotizaciones, así como un ajuste en el monto de la pensión, también lo es, que ello no puede estimarse violatorio del principio de progresividad previsto en el artículo 1º. de la Constitución y en los artículos 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y 2 del Pacto Internacional de Derechos, Sociales y Culturales, en detrimento del derecho de recibir una pensión por jubilación, puesto que lo que se buscó con la medida en comento, fue asegurar la estabilidad financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, atendiendo a la realidad social imperante en el Estado de México desde mil novecientos noventa y nueve.

De Ahí concluyó correctamente el Tribunal Colegiado que contrariamente a lo que sostiene la quejosa, no puede admitirse que las modificaciones al sistema de pensiones, sea una regresión en menoscabo del derecho fundamental de que se trata, por el sólo hecho de que en legislaciones anteriores se hubieran fijado requisitos para su obtención y porcentajes distintos a los establecidos en la ley vigente, habida cuenta que no todos los lineamientos establecidos por el legislador para ejercer los derechos fundamentales, en el caso de pensión, relativo a la seguridad social, pueden ser calificados de inconstitucionales o bien inconvenientes, pues si están encaminados a preservar otras prerrogativas, bienes o intereses protegidos por la propia Constitución General y los tratados internacionales de los que México sea parte y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, tienen plena cabida en el orden jurídico.

En efecto, la misma Ley Fundamental e incluso los tratados internacionales han otorgado al legislador ordinario la facultad de establecer límites racionales para el ejercicio, de los derechos fundamentales reconocidos, lo que se traduce en que de respetarse la exigencia de que las restricciones impuestas no resulten arbitrarias, y sean acordes y proporcionales a la finalidad a que obedecen, resultan apegados al orden constitucional los diversos presupuestos procesales que el legislador disponga como obligatorios, entre ellos, el establecer los requisitos para obtener una pensión y el cálculo que, en su caso tenga derecho a ésta, el servidor público del Estado de México, en virtud de que con tales disposiciones de ningún modo se lesiona y, menos aún, se desconoce el derecho a gozar de una pensión.

Así, la necesidad de ajustar el sistema de pensiones, obedece a asegurar la estabilidad financiera del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, atendiendo a los eventos sociales que en cada época se han suscitado, a fin de lograr un equilibrio entre las necesidades de dicho Instituto y la de los derechohabientes, pues el legislador está facultado y obligado a dictar las medidas necesarias que permitan y garanticen el idóneo



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

funcionamiento de las instituciones encargadas de hacer efectivos los derechos de seguridad social, entre los que está el de pensión.

...

En ese orden de ideas, con la aplicación en el presente asunto del principio que se viene comentando no se pretende desconocer los derechos mínimos consagrados en la Constitución, sino hacer un análisis de su reglamentación conforme a una ley vigente en una época determinada –ley derogada– con relación a la nueva ley que le sustituye, acorde a las necesidades que imperan.

Por tanto, tal como sostuvo el Tribunal Colegiado que el artículo Cuarto Transitorio del Decreto número 277, publicado el dos de abril de dos mil nueve, y por ende el artículo 91 de la ley vigente en dos mil dos, no son violatorios del principio de progresividad, pues el legislador ajustó a la realidad social los lineamientos establecidos para acceder y llevar a cabo el cálculo de dicha pensión, a fin de asegurar la continuidad de los servicios proporcionados por el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, siendo acorde esta medida con el aludido principio al permitir el mejoramiento de los servicios brindados, así como al ampliar el número de personas beneficiadas.

40

En ese orden de ideas, resulta notorio el criterio sostenido por la Suprema Corte, en el entendido de que el principio de progresividad, en su vertiente de no regresión, no es absoluto, máxime que también existen limitaciones a los derechos humanos y no por ello son violatorios, toda vez que es necesario analizar si con una aparente disminución de prerrogativas se busca proteger uno o más derechos, lo cual debe encontrarse justificado al momento de realizar el análisis respectivo por parte del juzgador, de tal manera, que para el presente caso, la justificación se establece en la exposición de motivos que dio origen a la ley que se impugna por la presente vía, toda vez que como se ha manifestado a lo largo del presente escrito, no viola ningún principio contenido en la Carta Magna y por ende, no debe considerarse inconstitucional.

La reforma reclamada encuentra justificación en los siguientes elementos que encuadran con los establecidos en los criterio antes citado: A) Acreditar la falta de recursos, B) demostrar que se realizaron todos los esfuerzos para obtenerlo sin éxito y C) demostrar que se aplicaron al máximo los recursos, o que los recursos de los que se disponían, se aplicaron para titular otro derecho humano; esto se justifica con los hechos visiblemente notorios que atraviesa el Instituto, siendo que es de conocimiento público que la entidad se encuentra en un déficit económico, que ha llevado a que se elaboren diferentes estrategias financieras, para reestructurar el flujo monetario que necesita el ISSTEY para el cabal cumplimiento de su objeto.

Como se desprende de la tesis esgrimida y en unión con lo mencionado por los párrafos anteriores, es evidente que la situación actual del Instituto, encuadra con lo establecido en la citada Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte, por lo cual, no existe motivo para considerar que hubo violación al principio de progresividad, y que no se atendieron las circunstancias concretas, puesto que existió una justificación en su haber.

En tal virtud, se advierte que no existe razonamiento válido que demuestre la



LXIII LEGISLATURA DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE
YUCATÁN

GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATÁN PODER LEGISLATIVO

inconstitucionalidad de la referidos preceptos legales, dado que la emisión de los artículos controvertidos, se apegan a los principios constitucionales establecidos en nuestra Carta Magna y los ordenamientos legales que de esta deriven, por lo que se REAFIRMA que este órgano legislativo respetó y reconoció los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales que el estado mexicano forma parte.

4. PRUEBAS

1.- Instrumental de Actuaciones, que se hace consistir en todas y cada una de las actuaciones que favorezcan a mi representada.

2.- Documental Pública, consistente en copia certificada de Acuerdo de fecha 31 de agosto del año 2022, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán el mismo día, en el que se declaran electos los diputados para integrar la Mesa Directiva de la Sexagésima Tercera Legislatura, que fungirá durante el Primer Período Ordinario de Sesiones correspondiente al Segundo Año de su Ejercicio Constitucional, comprendido del 1 de septiembre al 15 de diciembre del año 2022.

3.- Presunciones Legales y Humanas en cuanto favorezcan a mi representada.

41

POR LO EXPUESTO Y FUNDADO, a esa H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, atenta y respetuosamente solicito se sirva:

ÚNICO.- Tenerme por presentado con este memorial y documentos que acompaño, rindiendo en tiempo y forma a nombre de mi representada el Informe requerido en el expediente en que comparezco.

Sin otro particular, le reitero mi distinguida consideración.

Mérida, Yucatán, a 18 de octubre de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. INGRID DEL PILAR SANTOS DÍAZ,
Diputada Presidenta de la Mesa Directiva

de la Sexagésima Tercera Legislatura, del Período Ordinario de sesiones correspondiente al Segundo año de su Ejercicio Constitucional.

017841

SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACION

2022 OCT 26 PM 12 19

OFICINA DE CERTIFICACION
JUDICIAL Y CORRESPONDENCIA

Recibido con caratula de (21) Folios y una copia del mismo
con:
un anexo en copia certificada en (1) Folio.
En el sobre que se acompaña

VICTOR JUAN RUIZ RODRIGUEZ